

Hispanoamérica en el umbral de la década de 1980

Gregorio Selser

Cuando, a fines de 1979, concluimos la lectura del trabajo colectivo **Introduction to Latin America Politic**,¹ reflexionamos que al menos uno de los párrafos de su parte final, aquel que ubica al período 1962-1973 como "uno de los más dolorosos" de la historia de nuestra América, se había quedado corto en la descripción y en cierto modo pecaba por defecto en relación con la calificación que sin duda le correspondería al período que corre desde 1971 hasta ahora.

Es cierto que en 1962 se desata la ristra de golpes de Estado militares que, contra todas las esperanzas y previsiones del presidente John F. Kennedy, liquidaran las ilusiones del proyecto que albergaba con su "Alianza para el Progreso" y esa variable peculiar a la que el chileno Eduardo Frei denominó "revolución en libertad". Es cierto también que con el golpe de marzo de 1964 que derrocó a Joao Goulart se instauraría un modelo militar-tecnocrático que hará fortuna más tarde entre quienes se propusieron imitarlo con mayor o menor fortuna; y que las formas y modos de la experiencia represiva brasileña señalarían, por su magnitud y profundidad, un ejemplo entonces atípico de dictadura, al menos en la porción sudamericana.

Doloroso como fue ese proceso que parece ahora estar llegando a su fin, el brasileño no consumaría, sin embargo, las atroces y más trágico-dramáticas características que adoptarían en su inmediata vecindad los casos de Bolivia (1971), Uruguay (1973), Chile (1973) y Argentina (1976). No se postula que lo que ocurrió en Brasil fue inferior, como represión cualitativa y cuantitativa a lo que aconteció y sigue aconteciendo en los otros tres casos del extremo sur continental. Pretendemos apenas apuntar la rectificación de que nunca antes se había registrado, como en la terrible década de los 70, un concierto tal de voluntad homicida generalizada y sin límites de fronteras nacionales, este consenso de violencia científica descargada desde los mandos áulicos en forma de terrorismo de Estado, esta persistente atmósfera de necrofilia elevada a la categoría de marco político institucionalizado y hecho costumbre, hasta el punto de que no puede disociarse la imagen de esos tres casos de un tétrico común denominador, negatoria, frustráneo y violador de los derechos humanos, precisamente allí donde era fama bien ganada la de que salvo contadas excepciones se los respetó

¹ Por Carlos A. Afonso, Herbert de Souza y José C. Junqueira, **LARU Latin American Research Unit**, Toronto, Canadá, 1976.

durante muchas décadas como principio obvio de gobiernos republicanos y democráticos.

Correctamente apunta la publicación de LARU hacia la crisis global del sistema capitalista y a la predominante presencia de las corporaciones transnacionales, como factor presente en el proceso que aparenta tender a la liquidación de viejos símbolos y estructuras que ya no responden a los requerimientos y objetivos del orden tradicional. Pero habiendo sido editada a mediados de la década, al hallarnos pisando los umbrales de los años 80 sus diagnósticos enfrentan realidades que o bien los desmienten o bien los sobrepasan. La caracterización que entonces se hacía, como "progresistas o nacionalistas" de los gobiernos de Panamá, Costa Rica y Honduras, puede seguir siendo válida para los dos primeros y no lo es para el último, que continúa debatiéndose entre las contradicciones de su feble burguesía, las ambigüedades de su estamento militar y la perseverante alianza de los terratenientes y las compañías fruteras norteamericanas

¿Y qué decir del giro que están tomando los acontecimientos en El Salvador, con el derrocamiento por una asonada militar del general Carlos Humberto Romero el 15 de octubre de 1979, sin que pueda pronosticarse el rumbo definitivo que seguirán los cuadros medios de oficiales del ejército que relevaron a su máximo jefe? O, caso extremo, ¿qué predicciones podrían trazarse respecto del futuro de Guatemala, en donde prosigue sin intermitencias el baño de sangre iniciado en julio de 1954?.

Lo ocurrido en Nicaragua, en cambio, parece contradecir todas las expectativas y pronósticos prevalecientes a mediados de la década. Empero, el desalojo por obra de un ejército popular de un régimen al cual hasta último momento no le faltaron soldados regulares avezados, armas modernas y abundante reserva de municiones, aparejó la eclosión de un fenómeno cuya importancia y consecuencias resultan todavía incalculables, el 19 de julio de 1979, fecha de la derrota de Anastasio Somoza Debayle, tiene una significación no muy distinta de la que en su época marcó - 6 de enero de 1959 - la entrada en La Habana de los triunfantes barbudos de Sierra Maestra. Bien que se trate de situaciones y épocas desiguales, importa rescatar en el ejemplo del triunfo de "los muchachos" sandinistas un viraje sustantivo respecto de todo cuanto había ocurrido durante los años 70.

La política de James Carter

El lapso comprendido entre 1968 y 1976, considerado como "la mayor oleada de agitación social y de proyectos de cambio que América Latina haya conocido en

la época contemporánea",² clamaba por correctivos acordes con la óptica republicano-conservadora de Richard M. Nixon, el hombre que jamás **perdonó** en bloque a Iberoamérica, por los escupitajos y pedradas de Lima y Caracas en 1958. Valido del recurso de la **low profile** (presencia discreta) en la región, simple máscara de una vigilancia militante y permanente del traspatio del imperio, Nixon optó por elegir interlocutores válidos y/predilectos como el Brasil ("Allí donde vaya Brasil, irá América Latina " - llegó a postular), una escogencia que reafirmó Henry Kissinger, secretario de Estado, al calificarla en febrero de 1976 como "potencia emergente". Esto ocurría en tiempos del sucesor de Nixon, Geral Ford, en vísperas de la renovación presidencial y en circunstancias en que desde Washington se repetía la conocida y feble promesa de corrección de tropelías y desafueros ya cometidos en la región:

"Nuestras políticas con respecto al hemisferio en el pasado, han oscilado entre las prescripciones norteamericanas y la negligencia latinoamericana. Hoy día estamos buscando un enfoque más estable, basado en compromisos realistas y deberes compartidos. Nuestro diálogo con América Latina se basa en los principios de intervención, en la igualdad soberana de las naciones, y en el mutuo respeto entre asociados para enfrentar la interdependencia global. Estos principios guiarán los criterios de Estados Unidos en el asunto del Canal de Panamá, en cuanto a la posición de Cuba en el Hemisferio, y en los diversos asuntos restantes, que incluyen las relaciones hemisféricas tanto económicas como políticas".³

La "ofensiva" de Torrijos sobre la Zona del Canal, que no cejaba; el cese del bloqueo a Cuba por parte de la mayoría de los países latinoamericanos que lo habían mantenido desde la decisión de julio de 1964, y que había demostrado ya ser prácticamente ineficaz; la creciente y perceptible agitación en porciones del Continente habitualmente "congeladas"; y el acceso a la condición de independientes de ex colonias europeas, que al propio tiempo pasaban a integrar el aparato panamericanista de la OEA (con imprevisibles efectos futuros sobre las votaciones de la corporación), enmarcaban el cuadro que iba a preceder a las elecciones presidenciales de noviembre de 1976. Nada había, empero, que permitiera esperar un cambio sustancial en la relación entre Estados Unidos y las restantes naciones de la región:

"Debajo de esa débil retórica republicana, sin embargo, la realidad política en las administraciones Nixon-Ford consistió en frenar las experiencias de cambio social, mediante una respuesta fuerte, en que se combinaron, una vez más, las acciones de las más variadas agencias. El Departamento del Tesoro se encargó de manejar los problemas de la renegociación de las deudas públicas externas de los

² Luis Maira, "Estados Unidos y América Latina: ¿Perspectivas de cambio bajo la administración de Carter?, en **Cuadernos Semestrales. Estados Unidos: Perspectiva Latinoamericana**, CIDE, México, No. 1, abril de 1977, p 54.

³ **United Foreign Policy, An Overview**. Departamento de Estado, enero de 1976, p. 21. Citado por Luis Maira, op. cit., p. 54.

países latinoamericanos con Estados Unidos, y de fijar una línea agresiva en el otorgamiento de créditos por parte de las instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El Departamento de Estado llevó adelante las ofensivas diplomáticas, y sus dirigentes manejaron con dureza las ruedas de negociación bilateral. El Pentágono reforzó los programas de ayuda militar a las fuerzas armadas de aquellos países en que existían mayores riesgos, y la CIA desarrolló la ya estrategia de la desestabilización mediante el apoyo material logístico a los sectores conservadores".⁴

Cuando James Carter asciende a la presidencia - 20 de enero de 1977 Iberoamérica presenta un cuadro sociopolítico jamás antes registrado en su trajinada historia: el de que dos tercios de su población total estén gobernados por dictaduras militares de signo conservador y militantemente reaccionarias y antipopulares (con excepción de Perú y Panamá), como se podrá observar de las comparación de las siguientes tablas (I y II):

El acceso de Carter a la presidencia se acompaña de una expectativa típica del liberalismo latinoamericano: la de que la presencia de un gobernante demócrata aliente las tendencias civilistas de determinadas capas de las burguesías locales, inclinándolas en dirección de la recuperación de las prácticas de la democracia representativa, incluyendo el retorno a los mecanismos electorales regulares y el ejercicio parlamentario. Ello era tanto más indispensable, cuanto que nunca antes se había producido, especialmente en el llamado Cono Sur, un programa tan masivo de represión de las expresiones de oposición populares, radicales e izquierdistas de todo cuño. La "yakartización" desatada en Chile a renglón seguido del sanguinario derrocamiento de Salvador Allende, fue un modelo que se ejecutó meticulosa e implacablemente.⁵ La institucionalización generalizada de las torturas, la prisión sin juicio ni orden de arresto previa y el exilio forzado, con todo lo que tienen de inhumano, quedaron disminuidas como efecto disuasivo frente a una práctica hasta ese momento desconocida: la de hacer **desaparecer** al adversario o enemigo político, sin que de él quedara rastro alguno. Lo que había sido ocasional y repudiable públicamente - provocando la consiguiente intervención judicial - en la historia de las actuaciones militares y policiales de nuestra América, pasó a ser un programa de exterminio cruel, premeditado y hasta cierto punto electivo.

El terrorismo de Estado cobró así carta de ciudadanía en nombre de razones tan poco especificables racionalmente, como la "doctrina" de la seguridad nacional. La magnitud de los crímenes planificados desde las más altas instancias del poder llegó a conmovier a los niveles máximos de instituciones internacionales,

⁴ **Ibid.**

⁵ Yakarta, capital de Indonesia, dio el nombre a un programa masivo de exterminio, desatado por el general Suharto a partir de octubre de 1965, que se prolongó durante varios meses y costó la vida a aproximadamente un millón de personas, así como la prisión durante años a varios centenares de miles. El pretexto fue una frustrada rebelión "comunista"?

tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), los que actuaron en consecuencia enviando, de acuerdo con sus respectivos estatutos y reglamentos, comisiones investigadoras que en todos los casos dictaminaron que las denuncias no eran ni gratuitas ni antojadizas.⁶

La violación de los derechos humanos

La naturaleza de este fenómeno represivo, su magnitud y alcance crearon una necesidad inédita en los anales de las luchas sociales: la de ubicar como reivindicaciones prioritarias el cese de las detenciones no acompañadas de procesos, el cese de las torturas a los presos, la eliminación de los grupos que operan con los nombres de "parapoliciales" o "paramilitares" y son tolerados cuando no autorizados y/o dirigidos por el propio aparato de la "seguridad" estatal y, sobre todo, el poner término a las llamadas **desapariciones**, junto con la reaparición de las millares de personas a las que un militar argentino clasificó eufemísticamente como "ausentes para siempre".⁷

La mera circunstancia de que se deba dar prioridad a esas solicitudes, con prelación a derechos tradicionalmente reconocidos, como los de reunión y de huelga, ilustran con creces el grado de barbarie y ferocidad alcanzados por los sistemas represivos de la burguesía, sin que se distingan límites entre dictadores de países "civilizados" como los del Cono Sur, y algunos "tropicales" de las Antillas y Centroamérica,⁸ que en otros tiempos (Jorge Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio Carias Andino en Honduras, Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana, Fulgencio Batista en Cuba), se hicieron legendarios como prototipos de homicidas furibundos y vesánicos. Por el contrario, la eficiencia "científica" con que se ejercen estas prácticas revela que no se trata de caprichos o azares, sino de proyectos gubernamentales que sirven de apoyatura a modelos económicos previstos para varios lustros, como mínimo. No es casual, por ejemplo que por la vía de las **desapariciones** o los exilios forzados se haya descabezado a las expresiones tanto izquierdistas como ultraradicalizadas de las organizaciones

⁶ En momentos en que redactamos estas cuartillas, el Departamento de Estado ha publicado un grueso volumen, que incluye lo atinente a los países latinoamericanos, Cfr. **Country Reports on Human Rights Practices for 1979. Report Submitted to the Committee on Foreign Affairs (U.S. House of Representatives) and Committee on Foreign Relations (U.S. Senate) by the Department of State.** Joint Committee Print, 96th Congress, ad Session, February 4, 1980. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 1980.

⁷ Teniente General Roberto Viola, comandante en jefe del ejército.

⁸ Parecería que salieran sobrando clasificaciones tales como "nazi", "fascista", etcétera. Cuando, con motivo del "jueves negro" del 31 de enero de 1980, un observador extranjero opinó ante un catedrático guatemalteco que el genocidio de la embajada de España era un acto típicamente fascista, su interlocutor respondió: "- ¿Fascista el general Lucas? Ni siquiera sabe qué es fascismo. Lo han elegido por bestia bruta sus camaradas, para hacer el trabajo que está haciendo".

políticas, o se haya extirpado capas de intelectuales y profesionales que de otro modo hubieran, quizás, formado parte de partidos contestarios y en esa condición integradas las luchas obreras y revolucionarias que fueron una constante a lo largo del siglo.⁹

El tema de la violación de los derechos humanos ya estaba presente en las consideraciones electorales del equipo Carter desde comienzos de 1976. Luis Maire anota al respecto:

"Al término del conflicto de Vietnam y Camboya, se había suscitado en Europa una crítica particularmente viva, que los dirigentes demócratas hicieron propia. Maurice Duverger, profesor de ciencia política de la Sorbonne, resumió muy bien este tipo de opiniones cuando escribió: 'No se puede jugar con los principios que se proclaman. Lo que ha fracasado hoy en el Extremo Oriente es esta política americana que se ha denominado el fascismo exterior. Permaneciendo como una democracia liberal en el interior, los Estados Unidos aplican en sus relaciones internacionales métodos totalmente opuestos: la dictadura, la represión permanente, la violencia, el terror, el aplastamiento a sangre y fuego. La tiranía de Lon Nol y de Thieu no serán, probablemente, reemplazadas por un régimen democrático. Pero si llegaran tiranías, al menos éstas no serán ejercidas en nombre del mundo libre, ni en el de los Derechos del Hombre'¹⁰.

Lo que Duverger escribía en 1975 era en esos mismos momentos - y en los años siguientes, por supuesto - perfectamente aplicable a algunos países de Iberoamérica, y los nombres de Lon Nol y Thieu fácilmente sustituibles por los de Pinochet y Bordaberry y sus mandantes. La conciencia de esa aplicabilidad a los asuntos latinoamericanos explica que en la plataforma nacional del Partido Demócrata estadounidense en 1976, se hiciesen las siguientes puntualizaciones

"La nueva administración Demócrata deberá iniciar una nueva política exterior norteamericana.

"Los ocho años de diplomacia Nixon-Ford han dejado a nuestra nación aislada en el exterior y dividida internamente. El departamento ejecutivo ha diseñado y aplicado políticas secretas y arbitrariamente, desde el momento del bombardeo secreto en Camboya, hasta la reciente ayuda encubierta en el caso de Angola. Estas políticas han descansado en maniobras **ad hoc** unilaterales y en una diplomacia de equilibrio del poder que se adapta mejor al siglo pasado que a éste. Han desdeñado los principios tradicionales norteamericanos, que una vez nos ganaron el respeto de otros pueblos, al tiempo que inspiraban el nuestro propio. En lugar de llevar a cabo esfuerzos por fomentar la libertad y la justicia en el

⁹ Se calcula - principios 1980 - que por razones políticas y/o económicas han emigrado de Uruguay, Argentina y Chile en los últimos siete años, aproximadamente medio millón de personas. En esta cuenta no se incluyen los **desaparecidos** o "ausentes para siempre".

¹⁰ Maurice Duverger, "Pour une diplomatie biartisanne", en *Le Monde*, París, 17 de abril de 1975., Citado por Luis Maire, op. cit., p.51.

mundo, la administración Republicana ha construido un penoso **récord** de despreocupación por los derechos humanos, interferencia manipuladora en los asuntos internos de otras naciones y, frecuentemente, mayor preocupación por nuestras relaciones con adversarios totalitarios que por las que tenemos con nuestros aliados democráticos (...)

"Reafirmaremos el compromiso fundamental norteamericano con la defensa de los derechos humanos en todo el planeta. Norteamérica debe trabajar por la liberación de todos los presos políticos (...) en todos los países (...) Norteamérica debe seguir siendo un bastión en el apoyo a la libertad humana en todos los países (...).

Y, ya casi en la parte final del documento programático, se hacían otras consideraciones:

"En los últimos ocho años nuestras relaciones con América Latina se han deteriorado en medio de una indiferencia de alto nivel de un incremento en la dominación militar de gobiernos latinoamericanos y de revelaciones de una extensa interferencia norteamericana en la política interna de Chile y de otras naciones. Los principios de la Política de Buena Vecindad y la Alianza para el Progreso, bajo los cuales estamos comprometidos a trabajar como iguales con las naciones de las Américas, siguen siendo válidos hoy en día, pero parecen haber sido olvidados por la actual Administración(...)"¹¹. Debemos establecer claramente nuestra repulsión ante las sistemáticas violaciones de los derechos humanos básicos que han tenido lugar bajo algunos regímenes militares latinoamericanos(...)"¹².

El tema de la violación de los derechos humanos se convirtió, en efecto, en uno de los pivotes de la política hemisférica de Carter especialmente durante los dos primeros años, aunque una evaluación de sus efectos sobre la conducta de los regímenes militares de la región quizás conduzca a conclusiones escépticas, sobre todo en razón de los vaivenes circunstanciales en la conducta del Departamento de Estado o de las contradicciones en que incurrieran funcionarios de alto nivel de las distintas agencias encargadas de su implementación. Por otra parte, aun reconociendo la sinceridad de Carter y otros de sus colaboradores en sus intentos de cumplir cabalmente sus compromisos en la materia, factores objetivos hicieron de esos intentos un propósito irregularmente cumplido. El más importante de

¹¹ Por muy válidos que esa plataforma demócrata haya estimado a las políticas que menciona - de los presidentes Franklin D. Roosevelt y John F. Kennedy, respectivamente -, cayeron en desuso o fenecieron junto con sus propugnadores. Los republicanos, además, se ocuparon, más que de olvidar esos principios, de combatirlos y repelerlos, especialmente en lo que concierne a los fondos de la Alianza para el Progreso. Cfr. Gregorio Selser. Alianza para el Progreso, la mal nacida. Ediciones Iguazú, Buenos Aires, 1964.

¹² Plataforma Nacional Demócrata, 1976", texto correspondiente a las "Relaciones Internacionales", en **Cuadernos Semestrales. Estados Unidos: Perspectiva Latinoamericana**, No. 1 abril de 1977, pp. 133-147, CIDE, México.

esos factores fue, sin duda, la incapacidad de la rama ejecutiva para obligar o inducir al sector financiero privado estadounidense a renunciar a su apoyo práctico a los regímenes violadores de tales derechos humanos. La simple lectura de las cifras estadísticas mostrará que no sólo no disminuyeron sino que se incrementaron hasta límites jamás alcanzados, los flujos de financiamiento del capital monopolista, representado por consorcios bancarios de Estados Unidos, países europeos y Japón. De donde las mejores intenciones éticomorales del puritano Carter tropezaron y cayeron ante la restallante realidad de los intereses por préstamos.

No está demás recordar que representantes estadounidenses en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional (FMI) afrontaron situaciones conflictivas generadas por la obvia incompatibilidad entre sus criterios tecnocráticos y las instrucciones "políticas" del Departamento de Estado, que a su vez reproducían las de la Casa Blanca. Hubo órdenes y contraórdenes, vetos seguidos de aperturas vergonzantes, admoniciones corregidas con sonrisas y, en suma, incoherencia en las decisiones oficiales. La más reciente se está produciendo en momentos de redactar esta crónica, en febrero de 1980. El Salvador, públicamente reconvenido en 1977 por sus probadas violaciones de los derechos humanos, al punto de que su gobierno renunció malhumoradamente a la ayuda militar de Estados Unidos, acaba de recibir la oferta de asesoramiento y equipos bélicos por parte de Cyrus Vance, el mismo secretario de Estado que suscribió en su momento la acre censura al país. Esto, en circunstancias en que las víctimas del terrorismo de Estado salvadoreño centuplican en número a las que se habían producido en la etapa final del régimen de Arturo H. Molina (1972-1977).¹³

Vuelta de tuerca

El período de buenos deseos se agotó en la administración Carter antes de fenecer el lapso correspondiente a su primer mandato. Con la mirada puesta en su reelección, Carter endureció su conducta en la arena internacional. Los sucesos de Irán y de Afganistán, la crisis energética mundial y ciertas exigencias derivadas de necesidades electoreras, ausentes de la liza contra el candidato Ford en 1976, muestran al hasta hace poco seráfico pastor de Plains, Georgia en poses y actuaciones de casi halcón.

¹³ En julio de 1978 el Departamento de Estado vetó un crédito de 270 millones de dólares a la empresa Allis Chalmers, destinada a financiar la provisión de turbinas para el complejo hidroeléctrico Yaciretá Apipé. El veto pronunciado por el representante estadounidense ante el Eximbank, fue levantado tres meses más tarde, en octubre, al parecer por presión de los **lobbies** del capital monopolista. Cfr. Atilio A. Borón/Gregorio Selser, "Las relaciones argentino-norteamericanas bajo la administración Carter" en **Cuadernos Semestrales. Estados Unidos: Perspectiva Latinoamericana**, No. 6, 2do. semestre de 1979, CIDE, México. Otros trabajos, en el mismo volumen, analizan la conducta ambigua del gobierno Carter con relación a los derechos humanos en otros países.

Muy atrás ya el recuerdo de su compromiso para con Panamá, casi en el bote de desperdicios el promisorio acuerdo del SALT II con Brezhnev, retrocedidos los pasos que había dado en pos de una - siquiera eso - aproximación a Cuba, Carter trata de aparecer ante los votantes con la armadura de San Jorge. Su beatífica y cosmética sonrisa ha cedido paso al gesto adusto y el semblante hosco. Los presupuestos militares, que tanto en la Plataforma Nacional Demócrata de 1976 como en discursos aún recordables prometían ser objeto de reducciones sustanciales, están sobrepasando los topes anteriores y amenazan batir todos los **récord** hasta la fecha. La exasperación y la incontinencia verbales recuerdan ya los peores momentos de la Guerra Fría y el lenguaje abusivo de John Foster Dulles. Hay una escalada belicista con reminiscencias del equilibrio de borde de guerra de los años 50.

Releyendo el llamado "Segundo Informe Linowitz",¹⁴ resulta desalentador comprobar cómo en el breve tiempo de tres años las moderadas ilusiones de un liberalismo curado de las fantasías caritativas del equipo Kennedy son igualmente sobrepasadas por concepciones recalcitrantes a ultranza. Y no se trata de que ese "Informe" haya satisfecho las expectativas más urgentes de las clases populares de nuestra América puesto que no había sido preparado para ellas sino para satisfacer los requerimientos programáticos del Partido Demócrata o quizás con mayor precisión aún, los del sector al que globalmente se ha denominado Comisión Trilateral. Lo que resulta digno de reflexión es que ni tampoco esas moderadas ilusiones se aproximaron a una razonable materialización. Así, por ejemplo, en momentos en que pergeñamos estas cuartillas, se suceden en Panamá las quejas y/o reconveniones por la falta de cumplimiento honrado de la letra y el espíritu del tratado Carter-Torrijos, considerado por Carter en su campaña electoral de 1976 como el pivote esencial de la "nueva" política que requería Iberoamérica; y las relaciones con Cuba han alcanzado el nivel más bajo desde la asunción de la presidencia por el sucesor de Gerald Ford.

Dentro de este cuadro de decepción y frustraciones, incluso las noticias aparentemente reconfortantes se acompañan de referencias ominosas. Por ejemplo, si nos trasladamos a páginas más atrás, a las tablas I y II relativas a las masas iberoamericanas que en 1977 estaban gobernadas por regímenes militares y las que lo estaban por regímenes civiles, y las comparamos con las que proporcionaremos a continuación (tablas III y IV), correspondientes al comienzo de la presente década de 1980, observaremos que las 14 naciones comprendidas en el cuadro I se han reducido ahora a 10 (se han "institucionalizado" Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Panamá); pero si tomamos en cuenta las cifras de población, observaremos que el cambio es apenas perceptible y que, como contraste digno de ser meditado, el número de efectivos de las fuerzas armadas, "paramilitares" y "parapoliciales", ha pasado de un total de 1.289.030 agentes en

¹⁴ "Estados Unidos y América Latina: Próximos Pasos". Segundo Informe de la Comisión sobre Relaciones Estados Unidos-América Latina. 20 de diciembre de 1976, Centro para las Relaciones Interamericanas. La traducción figura en **Cuadernos Semestrales. Estados Unidos: Perspectiva Latinoamericana**, No.1, abril de 1977, pp. 149-172, CIDE, México.

1977, a 1.684.950 en 1980, o sea más del 30 por ciento de aumento pese al cambio "civilista" de los cuatro países mencionados.

La comparación se hace tanto más preocupante, cuanto que el total de poblaciones consideradas en las tablas de 1977 y 1980 ha sufrido un aumento de menos del 8 por ciento. Lo cuantitativo se hace además cualitativamente más grave si añadimos factores tales como la sofisticación de los aparatos represivos y el empleo cada vez mayor de técnicas de domesticación psicológica o de supresión física a niveles nunca antes registrados en Iberoamérica. También debería sumarse lo aleatorio o contingente de estas categorizaciones: Bolivia, por ejemplo, no termina de consolidar su proceso constitucional y siempre está pendiente sobre el Palacio Quemado la amenaza de nuevas recidivas golpistas castrenses; y en el caso notorio de Colombia, desde que asumió el gobierno Julio César Turbay Ayala se hace difícil delimitar si funge un régimen civil o si éste funciona "bordaberrizado"

Se tienen "metas", no "plazos"

El fenómeno general sólo se ha visto a u fines de la década del 70, con la mejor noticia que tuvo Centroamérica en varias décadas: el derrocamiento de la "dinastía sangrienta" de los Somoza en Nicaragua, por obra de una formidable insurrección popular, simbólicamente representada en la figura de aquél sobre cuyo asesinato a traición, el 21 de febrero de 1934, se cimentó el corrupto poder dinástico: Augusto C. Sandino.

Pero el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ya está obrando, como en el caso de la revolución cubana en 1959, el factor reactivo opuesto al juego del efecto demostración. Sus vecinos El Salvador, Guatemala y Honduras, por muchos lustros regidos por lógicas militares coludidas con las oligarquías locales, si con antelación venían ejerciendo las peores prácticas de represión y exterminio de las expresiones opositores o favorables al cambio, a partir de julio de 1979 han exarcebado sus métodos sin parar mientes en el costo material ni en las denuncias y protestas internacionales. En el ambiguo desarrollo de las respuestas de la Casa Blancas y el Departamento de Estado, se percibe el retorno a las consideraciones de la **realpolitik**. Mientras Washington ofrece irrestricto respaldo a la junta salvadoreña, se muestra incapaz para obtener en favor de Nicaragua un reparador préstamo de 75 millones de dólares no destinables a adquisiciones militares sino a la reconstrucción del país.

No es ocioso aquí retornar a las postulaciones del segundo informe Linowitz:

"Como un ámbito en el cual viejos conflictos latentes entre Estados se han reavivado recientemente, América Latina podrá proporcionar una prueba de la posibilidad de controlar las carreras armamentistas locales. Y, en fin, como una región con una larga trayectoria doctrinaria de respeto por los derechos humanos,

la evolución de América Latina habrá de afectar de manera importante el futuro de ellos y de su represión o protección institucionalizadas.

"El objetivo primario de la política norteamericana en el Hemisferio Occidental debería ser trabajar con los países de América Latina sobre esta amplia agenda global. Pero Estados Unidos no puede seguir presuponiendo (...) la dominación norteamericana (...) La nueva administración debería rechazar claramente aquellas políticas obsoletas basadas en el paternalismo y en la dominación y debería mostrar, en cambio, su respeto hacia todos los países del Hemisferio Occidental y hacia sus objetivos políticos y económicos".¹⁵

Los vaivenes y contradicciones de la política latinoamericana de Carter muestran el reverso de aquellas esperanzas y recomendaciones. En lo que se refiere al campo de lo militar, entre 1970 y 1979 los gastos por adquisición de armas y equipos solamente se han decuplicado sobre todo en rubros ligados a la represión interna. Como el acento está puesto en las pseudo "doctrinas" de la seguridad nacional más que en las suposiciones de enfrentamientos entre naciones o expectativas de guerras internacionales, las víctimas de ese rearmamentismo especializado son, aparte de las economías locales, vastos sectores de las comunidades políticas adversas al statu quo, diezmadas o aventadas sin piedad.

Esas adquisiciones no son, obviamente, caprichosas y responden a la lógica del modelo hegemónico neocolonialista. Ya no hay límites geográficos para los desbordes de los cuerpos y grupos militares y policiales a los que sólo por irrisión semántica da en llamarse "fuerzas del orden". Si lo son en verdad, se trata del orden conservador, estático, preservador del **establishment** sacralizado por los principios capitalistas a los que se subordinan las clases dominantes y sus aliados externos.

Las tablas que proporcionamos páginas atrás muestran cómo, en cantidad y en magnitud, jamás antes se había producido en Iberoamérica una tan generalizada captura de los resortes gubernamentales en la región, por parte de un estamento, el castrense, que hasta la década de 1960 fungía apenas como uno más de los soportes del orden oligárquico.

Sobre el modelo brasileño instaurado a partir de marzo de 1964 se gestó una reproducción de asaltos al poder cuyos mentores no se ponían límites ni plazos, sino metas y objetivos. Un cuerpo militar tradicionalmente servidor de la clase dirigentes, devino paulatinamente socio, además de cómplice; de instrumento pasivo se convirtió protagonista activo en un proyecto que no se visualiza excepcional ni efímero, sino intemporal e irrestricto. Puesto que las formas de la democracia representativa y participativa eran cauce de expresiones mayoritarias y multitudinarias que por su número tendían a hacer prevalecer programas avanzados y progresistas, su hervor fue entrevisto como un riego alentador de

¹⁵ *Idem*, p. 154.

peligros mayores englobados como "revolucionarios". Para prevenir ese riesgo, el poder hegemónico resolvió prescindir de fachadas que se convertían en un estorbo, y apeló definitivamente a la fuerza, esta vez reemplazante ilimitada de marcos y resguardos del constitucionalismo democrático formal.

Las teorías de la **counter-insurgency** y de la **national security** proporcionaron el sustento "ideológico" del experimento. En el largo plazo, una de sus consecuencias será la mutación del rol tradicional de los militares convocados a la aventura del poder. De su función pretoriana de custodios del **establishment** burgués y columna armada de las diversas expresiones de los partidos liberales y conservadores que periódicamente se transmitían la posta gubernativa, los militares pasaron a integrar ellos mismos el **establishment**, insertándose por la vía del matrimonio, la asociación comercial y financiera (por el procedimiento de su inclusión en los directorios de las empresas nacionales privadas o transnacionales), o de su empleo como funcionarios en empresas estatales, o, como en los casos de la Nicaragua de Somoza y la Guatemala bárbara de los años 60 en adelante, para la apropiación de tierras rapiñadas a los indígenas.

Como todos los vicios y corruptelas del imperio, nuestra América hizo una importación tardía del sistema que hace de los coroneles y generales asociados y cómplices del gran capital y de los terratenientes. Del mismo modo que lo hicieron con los elementos de la Guerra Fría y el macartismo, nuestros milites se apropiaron de los elementos sustantivos del mecanismo que los co-optaba bajo la máscara respetable de la libre empresa privada, adaptándolos a las condiciones objetivas de sus respectivos países.

En Brasil, Argentina y Chile, por ejemplo, la intervención del Estado en sectores del comercio, y la industria y los servicios, incrementada durante y después de la Segunda Guerra Mundial, fue confiriendo al estamento castrense una participación cada vez mayor en los ministerios, secretarías y subsecretarías públicas, fenómeno que se acentuó con oportunidad en que por vía del golpe de Estado los militares accedieron al gobierno **de facto** (Brasil a partir de marzo de 1964, Argentina en septiembre de 1955, marzo de 1962, junio de 1966 o mayo de 1973, y Chile desde septiembre de 1973). La gestión administrativa que asumieron al margen de su llamada (cada vez menos) "función específica" en los cuarteles, bases y guarniciones, les facilitó el conocimiento directo de los dispositivos del gobierno civil y su adicción a éste.

Junto con ese ejercicio de la función gubernativa, el estamento militar conoció de cerca los goces, prebendas, privilegios, usufructos materiales y beneficios que se asocian naturalmente a aquélla. Y, de hecho, añadieron a su ingreso profesional, sueldos, honorarios, gastos de representación y otros estipendios que multiplican con creces sus ya elevadas remuneraciones,¹⁶ sin contar las expectativas anexas de

¹⁶ No hay **secreto militar** mejor guardado que el de los sueldos y demás ingresos profesionales de los oficiales, desde teniente hasta general especialmente cuando son ellos los que están en el poder: hasta el estado de sitio agrega cifras a sus remuneraciones y lapsos computables de

ascenso social y de prestigio que las burguesías no les retacean de modo alguno. En forma sumamente veloz, el estamento castrense responde a las tentaciones de casta y tiende a subsumirse como clase en el engranaje más activo de dominación de la burguesía. Esto explica más que sobradamente, aquello de que "no tenemos plazos, sino metas". Al no estar atados, como ocurría antaño, a la obligatoriedad de fijarse fechas de reintegro del poder a políticos y funcionarios civiles, los milites sólo se sienten obligados para con los objetivos de mediano y largo plazo de la clase hegemónica, de cuyos beneficios, réditos y plusvalías ellos perciben porciones significativas que alimentan su proclividad a la retención *sine die* del poder.

América Latina es hoy campo de miserias, frustraciones y desesperanzas. En algunos casos, la barbarie para la que ya no alcanzan adjetivos ha reemplazado el ejercicio de los derechos más elementales del hombre; y un rayo que no cesa fulgura, incendia, hiere y hace horno crematorio para individuos, grupos, colectividades y pueblos. Lo nuevo es que muy tecnocratizados ejércitos de gran parte de nuestros países ya no custodian como antaño a familias o clanes, sino a clases dominantes cada vez más engarzadas en la estructura transnacional de poder Calificaciones y destrezas que se adquieren con dineros que pagan pueblos sometidos, para remachar las cadenas de su sujeción. Son ejércitos-policías cuya función no es ya la de preservar la intangibilidad de las fronteras patrias, sino la de tutelar las muy bastas y sacrosantas arcas de la propiedad privada y mantener, en suma, los privilegios del orden capitalista.

La crisis global del sistema, una característica de los años 70, ha tenido en nuestra América repercusiones trágicas y atroces. Recordamos que al comienzo de estas crónicas se menciona como "uno de los más dolorosos" de la historia de nuestra América al período 1962-1973, encuadramiento con el que nos permitimos discrepar. Tanto en términos cuantitativos como cualitativos, la suma de horrores, crímenes y tragedias que parecen no tener solución de continuidad, se inician en 1971 y opacan todos los antecedentes conocidos hasta ahora en el Continente. En El Salvador y Guatemala ya no existe capacidad razonable para computar siquiera el número de muertos y desaparecidos cotidianamente. En otros países hay indicios suficientes de que los cuerpos armados velan sus instrumentos de muerte y continúan adiestrándose con las más avanzadas innovaciones que en materia de represión se importan desde los centros de poder neocolonialistas. Y más hacia el sur, finalmente, junto Con cierto tipo de **aperturas** - Brasil, Bolivia, Perú que ni siguiera se pueden anticipar como sinceras y permanentes subsisten inalterables regímenes que superaron en violencia - terrorismo de Estado - todo cuanto se conocía en la historia del Continente. La década del 60 se inició con el triunfo de la revolución cubana y la del 70 con la victoria electoral de la Unidad Popular en Chile. Esta que se inicia, del 80, lleva, por diferencia de meses, el signo promisorio de la nueva Nicaragua. Con este nombre, Nicaragua, queremos poner término a estas cuartillas, porque representa

la antítesis de lo que, en razón de su misma descripción descarnada, pudiera ser considerado deprimente y pesimista. Si más de 46 años de somocismo no pudieron con tu pueblo, el de Sandino, ¿cómo no ser optimistas en cuanto al futuro de nuestra América, Nicaragua? Decimos, pues, de nuevo, Nicaragua.

Referencias

- Afonso, Carlos A.; De Souza, Junqueira, José C., LARU LATIN AMERICAN RESEARCH UNIT. - Toronto, Canadá. 1976; Estados Unidos y América Latina: ¿Perspectivas de cambio bajo la administración de Carter?
- Anónimo, COUNTRY REPORTS ON HUMAN RIGHTS PRACTICES FOR 1979. - México, CIDE. 1977;
- Anónimo, CUADERNOS SEMESTRALES. ESTADOS UNIDOS: PERSPECTIVA LATINOAMERICANA. 1. p133-147 - Buenos Aires, Argentina, Ediciones Iguazú. 1964; Las relaciones argentino-norteamericanas bajo la administración Carter.
- Anónimo, CUADERNOS SEMESTRALES. ESTADOS UNIDOS: PERSPECTIVA LATINOAMERICANA. 1. p149-172 - México, CIDE. 1979;
- Anónimo, UNITED FOREIGN POLICY, AN OVERVIEW. p21 - Departamento de Estado. 1976;
- Borón, Atilio A.; Selser, Gregorio, CUADERNOS SEMESTRALES. ESTADOS UNIDOS: PERSPECTIVA LATINOAMERICANA. 6 - México, CIDE. 1977; Estados Unidos y América Latina: Próximos Pasos. Segundo Informe de la Comisión sobre Relaciones Estados Unidos-América Latina. 20 de diciembre de 1976, Centro para las Relaciones Interamericanas.
- Duverger, Maurice, LE MONDE. - Washington, D.C., USA, Committee on Foreign Affairs (U.S. House of Representatives) and Committee on Foreign Relations (U.S.Senate) by the Department of State. Joint Committee Print, 96th Congress, ad Session. U.S. Government Printing Office. 1980; Pour une diplomatie bihartisane.
- Maira, Luis, CUADERNOS SEMESTRALES. ESTADOS UNIDOS: PERSPECTIVA LATINOAMERICANA. 1. p51, 54 - México, CIDE. 1977;
- Selser, Gregorio, ALIANZA PARA EL PROGRESO, LA MAL NACIDA. - París, France. 1975; Relaciones Internacionales.